

CAMBIO revela cómo más de 25.000 millones de pesos en subsidios de Agro Ingreso Seguro terminaron en manos de cuatro familias de Santa Marta.



Operación Magdalena

Algarrobo, un pequeño municipio del Magdalena de 1.358 kilómetros cuadrados y 12.000 habitantes, ha estado en las primeras planas de las noticias en los últimos días y no por la elección de alcalde que se llevará a cabo el domingo 18, sino porque allí tienen grandes extensiones de tierra los Dávila Jimeno, una poderosa familia samaritana que ha recibido más de 2.200 millones de pesos en subsidios de Agro Ingreso Seguro del Ministerio de Agricultura, el programa que está en el ojo del huracán porque solo en 2008 el 35 por ciento de los recursos adjudicados acabó en manos de unas pocas familias, entre ellas la Dávila Jimeno. Llegar a Algarrobo no es fácil. Con dificultad, y por 300.000 pesos, dos periodistas de CAMBIO lograron que un joven taxista, 'el viejo Richar', se le midiera a recorrer los 129 kilómetros de carretera que lo separan de Santa Marta, buena parte en mal estado.



Algarrobo está a 129 kilómetros de Santa Marta y tiene 12.000 habitantes.

Una vía polvorienta atraviesa extensos cultivos de palma africana, por la cual se llega a las dos fincas que los Dávila Jimeno tienen en los límites del pueblo: Campo Grande y La Faena, más de 1.500 hectáreas sembradas de palma. El objetivo era verificar si los recursos asignados para cinco proyectos de riego y drenaje —todos en Campo Grande— habían sido efectivamente invertidos y generado, como lo aseguró el ministro de Agricultura, Andrés Fernández, más de 500 empleos. Algarrobo, que nació como municipio en 1999 y estuvo durante muchos años azotado por los grupos armados, es un pueblo pobre como la mayoría de los 30 municipios del departamento, de calles destapadas y sin servicio de agua potable, con un hospital y dos escuelas, que aún espera que se haga realidad la promesa que hace dos años les hizo el presidente Uribe de que pronto tendrían alcantarillado.

Su gente es cautelosa, teme hablar sobre la familia Dávila y sus propiedades porque cree que podría perder la única fuente de empleo que ha tenido en años en los cultivos de la palma. Y la Policía refuerza la vigilancia y los controles. Aun así, en medio de vallenatos que suenan a todo volumen, CAMBIO logró hablar con uno de los empleados que lleva 20 años trabajando en las tierras de los Dávila.

Con voz pausada, el hombre curtido por el sol cuenta que su patrón, Juan Manuel Dávila Jimeno, lleva muchos años trabajando la tierra, que ha sido un empresario exitoso y ha contribuido a generar decenas de empleos en sus dos haciendas. Sin embargo, no sabe qué es el programa Agro Ingreso Seguro, pero dijo que el año pasado su patrón invirtió en tuberías para riego en las plantaciones. "Aquí hay una parte de la finca que tiene riego, pero falta la otra parte por hacer", aseguró.

No obstante, cuando los periodistas preguntaron por los proyectos de la esposa de Dávila Jimeno, María Clara Fernández de Soto, y de sus hijos Juan Manuel y Ana María, que también recibieron subsidios no reembolsables del programa gubernamental, aseguró: "El único que ha generado trabajo es mi patrón, es el único que tiene fincas aquí y el único que viene, aunque de vez en cuando aparece su hijo 'don Juanchito'. Pero yo no he visto a las señoras que ustedes me mencionan, ni siquiera sabía que ellas tenían tierra aquí". ➡



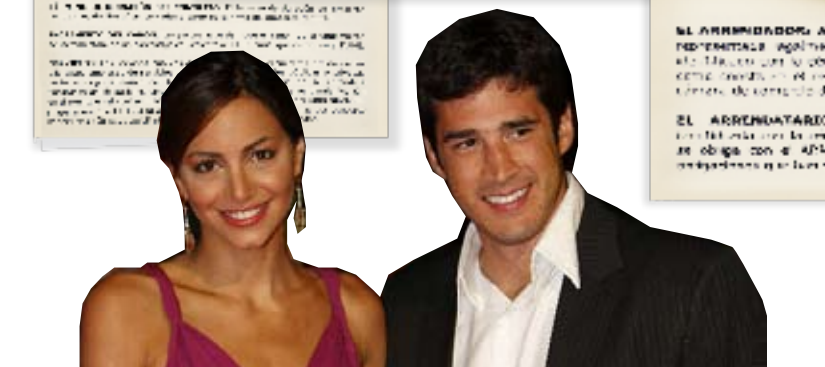
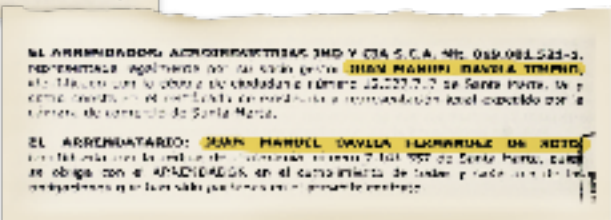
Finca La Faena.



Finca Campo Grande.



Juan Manuel Dávila Jimeno les arrendó 98,5 hectáreas de su finca Campo Grande a su hijo Juan Manuel (foto) y 110 de La Faena a su nuera, la ex reina Valerie Domínguez. Con eso su familia obtuvo más subsidios.



➡ Y sobre la ex reina Valerie Domínguez, novia de Juan Manuel Dávila, y a quien le fueron aprobados 306 millones de pesos en subsidios para riego y drenaje, y a los que renunció tras el escándalo, el empleado de Dávila Jimeno dijo: “A ella sí la he visto pero en televisión. Aquí nunca se ha aparecido y que yo sepa tampoco tiene tierras”.

Los Dávila Jimeno fueron los únicos beneficiarios de millonarios subsidios del programa Agro Ingreso Seguro para riego y drenaje en esa zona, y una de las cuatro grandes familias en el departamento. Y llama la atención la forma en que accedieron a los recursos. CAMBIO pudo establecer que los proyectos presentados por la familia Dávila y sometidos a evaluación del Instituto Interamericano

de Cooperación para la Agricultura, IICA, operador del convenio Agro Ingreso Seguro para “riego y drenaje” del Ministerio de Agricultura, son idénticos en su forma y todo parece indicar que ocultan un fraccionamiento de tierras para hacer posible que la misma familia pudiera beneficiarse de más recursos públicos para invertir en las mismas tierras en el mismo año.

Juan Manuel Dávila Jimeno, propietario de las fincas Campo Grande y La Faena, a finales de 2008 recibió 445 millones de pesos en subsidios no reembolsables a título personal y por medio de su empresa Agroindustrias JMD y Cía. otro por 442 millones. Pero también recibieron subsidios su esposa María Clara (440 millones) y sus hijos Juan Manuel (435 millones)

y Ana María (448 millones), todos para invertir en las mismas tierras. ¿Cómo lo hicieron? El 27 de febrero de 2008, Dávila Jimeno firmó contratos de arrendamiento de la finca Campo Grande con cada uno de sus tres familiares: a su esposa le arrendó 105 hectáreas por 1,5 millones pesos mensuales; a Juan Manuel 98,5 hectáreas por un millón de pesos al mes, y a Ana María 106,5 hectáreas por un millón de pesos mensuales (ver documentos).

Y para redondear la faena, el 2 de marzo, mes y medio antes de que se cerrara la convocatoria para ‘riego y drenaje’ para 2009, Dávila Jimeno le arrendó a la novia de su hijo, la actriz Valerie Domínguez, 110 hectáreas de la finca La Faena por un millón de pesos mensuales. La dirección de contacto que la ex reina certificó ante el Ministerio es la misma de la sede empresarial de la familia Dávila en Santa Marta. Para el proyecto presentado por la ex reina —similar a todos los demás— fueron adjudicados 306 millones de pesos. ➡

➔ “Es indudable que se presentó parcelación de tierras –dice un consultor que conoce el programa–. Como cada proyecto solo podía recibir hasta 600 millones, dividieron la finca para obtener más recursos y esa jugada les sirvió para multiplicar los subsidios”.

Tierra es pasión

No solo la familia Dávila Jimeno es una de las grandes beneficiadas con recursos públicos en Magdalena. También la familia de Alfredo Lacouture Dangond, padre de María Claudia Lacouture Pinedo, actual directora del programa Colombia es Pasión. La familia no solo recibió subsidios de Agro Ingreso Seguro en cabeza de varios miembros sino por medio de sus empresas. Alfredo Lacouture Dangond recibió 474 millones de pesos en subsidios en 2007, y 457 en 2008; su esposa Isabel Mónica Pinedo, 399 millones en 2008; sus hijos Alberto Mario, 471 millones en 2007 y 366 en 2008, Victoria Eugenia, 353 millones en 2008, y Alfredo Luis 412 millones en 2008. Todos fueron adjudicados para proyectos de riego y drenaje en Pueblo Viejo, una población que, según el programa presidencial Acción Social, alberga a cerca de 3.000 desplazados por la violencia.

Los Lacouture también recibieron subsidios no reembolsables por medio de dos empresas de su propiedad: C.I. El Roble, 472 millones de pesos en 2007 y 416 en 2008, y C.I. Palomino S.A., 479 millones en 2008, de cuya junta directiva hace parte la directora de Colombia es Pasión. Por otra parte, la familia Lacouture tiene relaciones comerciales con empresas que también recibieron subsidios, como FMP y Cía., V.C. y Cía., y V.F. S.A., en las que, según dicen en círculos empresariales de Santa Marta, también tendrían intereses. “Muchas familias obtuvieron esos subsidios porque no había prohibiciones establecidas, pero hoy se ve que la po-



Ana María Dávila, reina del Mar en 1999, y su mamá, María Clara Fernández de Soto, obtuvieron subsidios con la figura de tierras parceladas.

EL ARRENDADOR: AGROINDUSTRIAS JMO Y CIA S.A. NO. 839.001.521-1, representada legalmente por su socio gestor **JUAN MANUEL DÁVILA JIMENO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 13.127.212 de Santa Marta, CM, y como gerente en el certificado de inscripción y representación legal expedido por la cámara de comercio de Santa Marta.

EL ARRENDATARIO: **ANA MARÍA DÁVILA FERNÁNDEZ DE SOTO**, identificada con la cédula de ciudadanía número 13.127.212 de Santa Marta, quien se obliga con el ARRENDADOR en el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que han sido pactadas en el presente contrato.

EL ARRENDADOR: AGROINDUSTRIAS JMO Y CIA S.A. NO. 839.001.521-1, representada legalmente por su socio gestor **JUAN MANUEL DÁVILA JIMENO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 13.127.212 de Santa Marta, CM, y como gerente en el certificado de inscripción y representación legal expedido por la cámara de comercio de Santa Marta.

EL ARRENDATARIO: **MARÍA CLARA FERNÁNDEZ DE SOTO**, identificada con la cédula de ciudadanía número 13.127.212 de Santa Marta, quien se obliga con el ARRENDADOR en el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que han sido pactadas en el presente contrato.

Este año hay subsidios aprobados para 100 proyectos, y dentro de ellos figuran más de 1.571 millones para Magdalena, una cifra menor comparada con las de los dos años anteriores pero que tiene una explicación: los que recibieron subsidios en 2007 y 2008 no podían presentarse a la convocatoria para 2009. “No les dieron más porque se dieron cuenta de que la mayoría de los recursos estaban quedando en manos de unos pocos y eso era descarado”, le dijo a CAMBIO una analista del programa.

Polo en Bogotá

Los Vives, de gran influencia política y social en Magdalena y algunos de cuyos miembros han ocupado cargos públicos o de elección popular, es otra de las familias que más subsidios recibió el año pasado del programa Agro Ingreso Seguro: más de 13.000 millones de pesos.

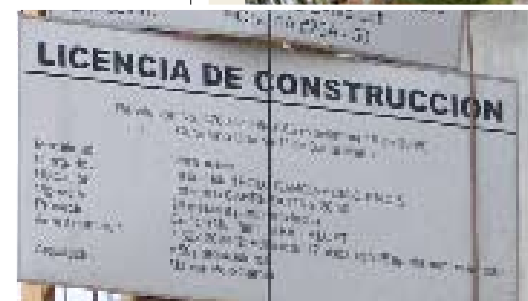
A título personal, Alfonso Vives Caballero recibió 437 millones de pesos; Alfonso González Vives, 400 millones; Andrés Felipe Vives Prieto, 409 millones, y José Francisco Vives Lacouture, 552 millones. Otros miembros de la familia los recibieron por medio de empresas: Proyectos Agrícolas Inmobiliarios G y V, 350 millones; Agropecuaria Mavil S.A., 429 millones; Agropecuaria Inmobiliaria Almaja S.A., 406 millones; Comercializadora de Banano y Palma, 419 millones; Inversiones Santa Inés, 788 millones, y Orlandesca S.A., 355 millones, entre otras. Todos fueron para proyectos de riego y drenaje en la zona bananera. Y también obtuvieron millonarios recursos para proyectos en Cesar (ver recuadro).

Personas cercanas a los Vives y empresarios del sector consultados por CAMBIO en Santa Marta, aseguran que la familia, que apoyó las campañas del presidente Álvaro Uribe, tiene una ficha clave en el Ministerio de Agricultura.



Se trata de Carlos Manuel Polo, un ingeniero civil especializado en Ciencias Agropecuarias que fue alcalde de Santa Marta en 1988 durante seis meses, y subgerente de Infraestructura del Incoder –adscribo al Ministerio de Agricultura– entre el 1º de septiembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2007. Hoy figura como contratista del Ministerio de Agricultura y desde cuando Andrés Felipe Arias puso en marcha Agro Ingreso Seguro en 2007, Polo sirve de enlace entre el Ministerio y el IICA, operador del programa de “riego y drenaje”. La presencia de Polo en esa entidad –el IICA– es relevante porque la defensa del programa Agro Ingreso Seguro se basa en su supuesta independencia frente al Gobierno y en su capacidad técnica: el IICA interviene tanto en la definición de los proyectos que se apoyan, como en su seguimiento posterior.

Polo llegó al Ministerio por sus conexiones con Luis Eduardo Vives, vinculado al proceso de la ‘parapolítica’ y hoy en libertad condicional. En diálogo con CAMBIO, señaló: “No niego mi amistad con Luis Eduardo Vives; mi abuelo, mi padre y yo hemos sido amigos de esa casa”. Y agregó que “esa relación no compromete los intereses del Ministerio y mucho menos los del IICA”. Desconocido en los círculos políticos de Bogotá, en Santa Marta, de



NEGOCIO familiar

La familia Vives que recibió subsidios de Ingreso Agro Seguro en Magdalena, también los obtuvo en Cesar por más de 5.000 millones de pesos, por medio de empresas que desarrollan proyectos en ese departamento:

- Construmundo S.A.: 464 millones
- Vicala, S.A.: 462 millones
- Vizu S.A.: 479 millones
- Sanvi S.C.A.: 479 millones
- Mevicala S.C.A.: 348 millones
- Sovijila S.A.: 465 millones
- Vicalavi: 438 millones
- Banavica S.A.: 479 millones
- Inmobiliaria Kasuma: 436 millones
- Vibeych S.A.: 477 millones



El contratista Carlos Polo Jiméñez es considerado ficha de los Vives en Minagricultura. Con su familia construye un lujoso edificio en Santa Marta, que ha generado polémica.

donde es oriundo, es conocido no solo por haber estado unos meses de alcalde, sino porque una sociedad familiar adelanta un proyecto inmobiliario en el barrio Bella Vista, uno de los más exclusivos de la ciudad: un edificio de 25 lujosos apartamentos, cuyo valor promedio es de 600 millones de pesos, y 50 parqueaderos. La súbita prosperidad económica de Polo no deja de sorprender a quienes hace solo seis años lo conocieron como un consultor que vivía de esporádicos contratos de asesoría agrícola. “Su suerte comen-

➔ zó a cambiar cuando llegó al Incofer y luego pasó al Ministerio —le dijo a CAMBIO un empresario de Santa Marta—. Hoy, además de ser contratista del Estado, es un próspero constructor”.

Según el certificado de Cámara de Comercio, Polo constituyó la empresa familiar con su esposa e hijos el 19 de octubre de 2007, con un capital de cinco millones de pesos. Dos años después, el edificio que está construyendo su sociedad familiar es cuestionado porque presuntamente se apropió de terrenos de la Nación que le dan al edificio acceso directo a la playa. Polo niega su participación en la sociedad: “Es de mi hijo que está asociado con una empresa de Medellín —dice—. Cuando pase el lío de Agro Ingreso Seguro les hablo del tema”.

El edificio de los Polo está a pocos metros de la sede del grupo Daabon, de los Dávila Abondano, una de las cuatro familias samarias que más subsidios recibió de Agro Ingreso Seguro el año pasado: más de 2.200 millones que invirtió, sobre todo, en proyectos en La Guajira (ver siguiente artículo).

Arrecian críticas

El programa Agro Ingreso Seguro está hoy bajo la lupa y ha sido blanco de muchas críticas, incluso de personas cercanas al Gobierno que han dicho que hacen falta explicaciones por parte de los responsables para despejar dudas. Por ejemplo, el ex ministro Juan Manuel Santos dijo en una entrevista con Yamid Amat: “Me parece un proceder indebido de los subalternos del Presidente. Deben una explicación al país porque lo ocurrido no tiene presentación”. En principio, resulta escandaloso que tantos recursos terminaran en manos de tan pocos y tan poderosos, cuando uno de los objetivos era “devolver equidad al campo”. Incluso la Contraloría General de la República dijo en un informe sobre el tema en julio de 2009, que hubo desigualdad en la asignación de los recursos del pro-



“Muchas familias obtuvieron subsidios porque no había prohibiciones establecidas”. Daniel Montoya, coordin. Agro Ingreso Seguro.

grama y advirtió que había un alto riesgo de estimular la concentración.

Sin embargo, no se puede negar que muchos recursos se invirtieron en proyectos que han generado empleo, aunque no tanto como alegan el ex ministro Arias y el ministro Fernández, pues no son intensivos en



María Claudia Lacouture, directora de Colombia es Pasión, figura en la Junta Directiva de una empresa familiar que recibió subsidios.

mano de obra o solo generan empleo temporal.

Hecha esta salvedad, una cosa es cierta y en ellos coinciden varios analistas: la falta de equidad del programa que, como señaló el ex ministro Juan Camilo Restrepo en su columna de *El Nuevo Siglo* y *El Colombiano*, “terminó beneficiando principalmente a los empresarios más ricos del campo (...) Al gobierno del presidente Uribe le encanta regalar dineros públicos a los más ricos y cobrarles pesados impuestos a los más débiles”.

Por su parte, el decano de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y ex director del Banco de la República Salomón Kalmanovitz, escribió en

su columna en *El Espectador*, que en los “dos gobiernos de Álvaro Uribe se ha consolidado la más vasta contrarreforma agraria de la historia del país”.

Y destaca que pese

a que hay cuatro millones de desplazados y más de medio millón de hectáreas arrebatadas o abandonadas, “los subsidios no se dirigen a compensar el daño infligido a las víctimas sino a financiar familias que tradicionalmente han ostentado la propiedad de latifundios que se mantienen ricas con la ayuda del Estado, y con más de una ‘oveja negra’ en negocios ilegales”.

Tanto el ex ministro Andrés Felipe Arias como el actual ministro Andrés Fernández insisten en la transparencia con la que han sido otorgados los subsidios de Agro Ingreso Seguro, pero a medida que salen a la luz nuevos detalles la situación lejos de aclararse se enturbia aún más.

No solo los requisitos del programa parecen imposibles de llenar por pequeños y medianos productores, sino que la presencia de subordinados del Ministerio en el IICA, como el señor Carlos Manuel Polo, ficha del ex congresista Luis Eduardo Vives, miembro de una de las familias que más subsidios ha recibido, tiende un manto de duda sobre la transparencia de las adjudicaciones. □